

Descentralización y las elecciones de noviembre

Margarita López Maya

Entre las situaciones sociopolíticas imprevistas y más interesantes que produjo el rechazo a la propuesta de reforma constitucional, se encuentra haber dejado con vida el proceso de descentralización político-administrativo iniciado en los años ochenta. Es de recordar que ese proceso se desencadenó por la movilización de organizaciones civiles y políticas de entonces, abriéndose espacios para la reforma del Estado con la llamada COPRE (Comisión Presidencial de Reforma del Estado). La “geometría del poder” con su esquema de consejos comunales, comunas y ciudades comunales debilitaba al municipio como unidad de gobierno local y autónomo y a la entidad federal como espacio articulador de comunidades regionales. Esa propuesta buscó erosionar esas dos instancias a favor de nuevas unidades territoriales cuyas autoridades dependerían más directamente del Presidente. Independiente de que en Venezuela haga falta una reorganización territorial más ajustada a los nuevos tiempos, la propuesta conllevaba un regreso a la centralización inicial de la Cuarta, un retroceso en la democratización del Estado.

La situación política creada por el rechazo a la reforma, es una oportunidad para ventilar ideas sobre lo que ha sido la descentralización de los últimos veinte años. Un balance preliminar arroja resultados mixtos. Por una parte, porque la elección de gobernadores y alcaldes por sufragio popular ha sido una modificación democratizadora de las estructuras estatales. Se ha observado la emergencia de liderazgos más cercanos a las comunidades regionales y locales, líderes que tienen sus propias bases y no dependen de las cúpulas partidistas que dominaban la democracia del pasado. Ha sido una ruta importante para la formación de relevo político. Los liderazgos y organizaciones políticas que gracias a la apertura de esos espacios surgieron en los años noventa, propulsaron las primeras experiencias de participación directa de las comunidades en las gestiones locales, como las mesas técnicas de agua, los consorcios sociales en varios barrios para su rehabilitación física, mesas de trabajo y presupuestos participativos. Estos desarrollos revitalizaron la vida urbana local, asfixiada y corrompida por el excesivo centralismo, acentuado

después del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, con el *boom* de los precios petroleros y el proyecto de la “Gran Venezuela”.

Como contraparte, existen muchos problemas en la gestión de esos niveles. En algunos casos se ha reproducido a escala menor el caudillismo y la corrupción del gobierno central. Servicios públicos como salud parecen haberse perjudicado por la falta de una visión estratégica nacional que señalara orientaciones y pautara la delegación de recursos. La polarización política por otra parte hizo estragos en nuestras policías durante los años de mayor confrontación política del primer mandato de Chávez, cuando gobiernos regionales y locales las degradaron al usarlas para intereses políticos particulares. Ello ha contribuido a la agigantada inseguridad que se vive en las ciudades.

Las tendencias re-centralizadoras que desde 1999 ha venido impulsando el gobierno de Chávez hace también difícil evaluar cuáles de los muchos problemas que tiene la administración pública se deben a la centralización, a la descentralización, o al choque entre estas tendencias contradictorias. Por ejemplo, en Caracas ha sido una calamidad que los candidatos escogidos por el chavismo para las elecciones en la ciudad no obedezcan a mínimos criterios de idoneidad para el cargo de alcalde. Barreto, Bernal y Rangel están allí impuestos por el dedo Presidencial que los seleccionó por necesidades políticas propias, que las bases entendieron en su momento y aceptaron. El resultado está a la vista: han dilapidado recursos sin que la ciudad haya logrado mejorar su calidad de vida urbana. Para el venidero noviembre peligros anteriormente aducidos por el chavismo, como el golpismo y las amenazas del imperio, estarán disminuidos y es un reto para el PSUV y sus aliados encontrar candidatos que hayan mostrado vocación de servicio hacia las comunidades locales y estén preparados para asumir las complejas tareas de administrar una ciudad como Caracas. Los caraqueños nos merecemos autoridades competentes, tolerantes, dispuestas a dialogar y ponerse de acuerdo con la diversidad que contiene la ciudad y un mejoramiento de los servicios urbanos como seguridad en los espacios públicos y privados, limpieza, alumbrado, transporte, cultura y entretenimiento.

Parece que la reorganización territorial hace falta en algunas áreas venezolanas. Para ello el municipio autónomo, tal y como lo define la Constitución de 1999 parece un concepto apropiado. Algunas partes del país pudieran ameritar una re-demarcación territorial. Pero así como el gobierno ha impulsado la democratización a nivel micro, con formas participativas como las mesas técnicas de agua, los comités de tierra urbana o los consejos comunales, ahora falta conectar ese nivel con el municipio a través de la descentralización de éste hacia las parroquias y otros eslabones intermedios. Las modalidades participativas creadas por el bolivarianismo debieran orientarse hacia el fortalecimiento de la autonomía popular y el empoderamiento de las comunidades organizadas. Para ello, la uniformidad, centralización y total dependencia a la Presidencia que planteó la reforma es contraproducente. Sólo siendo independientes los ciudadanos y las comunidades organizadas podrán ejercer control eficaz sobre la gestión estatal.

“Morochas”

La nefasta práctica de las morochas, inventada por Convergencia en 2000, permitida desde entonces por el TSJ y el CNE y practicada con entusiasmo por el MVR, pese al debilitamiento que produce a la representación proporcional que consagra la Constitución, volverá por sus fueros en las elecciones próximas. Es probable que el chavismo ahora pruebe esta medicina a una escala mayor que en el pasado.

Recordemos las circunstancias en que se dieron las elecciones regionales y municipales de octubre de 2004. La oposición, derrotada en el revocatorio de agosto, se negó a reconocer los resultados y denunció un fraude que nunca demostró. Ello propició la abstención electoral de sus propias bases, tiñendo el mapa nacional de rojo. Este año la situación sociopolítica es distinta. Los desempeños de los gobiernos regionales y locales –la mayoría chavistas y algunas muy criticadas- tendrán más peso y es probable que sectores de oposición salgan a votar masivamente, si las fuerzas de la oposición logran presentarse coherentes y con candidatos atractivos. Pareciera pues, que el

mapa político que surgirá en noviembre devolverá un poco de pluralidad. Pero, si se aplican las morochas, seguiremos viendo distorsiones en los cuerpos deliberantes, pues el perdedor se verá disminuido a una mínima expresión. Quizás con eso aprendamos que los mecanismos de la representación proporcional son un derecho democrático ganado por el pueblo venezolano desde 1946, que tiene entre otras bondades permitir que cuando los apoyos retroceden, se puede aún tener voz y voto en la esfera pública, con lo cual se garantiza pluralismo, supervivencia política y convivencia pacífica.